



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

254500
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

OF.1749/2020 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.



RECURRENTE: CÁMARA DE SENADORES y la CÁMARA DE
DIPUTADOS, ambos del CONGRESO DE LA UNIÓN.

En cumplimiento a la sentencia de veintisiete de febrero del
año en curso, se remiten los siguientes autos:

- [Redacted] en original
- Juicio de amparo indirecto [Redacted] y un legajo.

Le suplico el acuse de recibo correspondiente.
Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte.

El Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito.

Lic. Hilario Salazar Zavaleta

HSZ/oma

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO
CIUDAD DE MÉXICO



4 000254 203420

007475

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

265/2020

2020 MAR 9 AM 10 54

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibí de un enviado los:



VICTOR JUAN POIZ ~~ARZENAS~~

RECEIVED
MAR 10 2020
SECRETARÍA DE JUSTICIA

RECEIVED
MAR 10 2020
SECRETARÍA DE JUSTICIA



39716A 17 3
CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

2019 JUL 15 P 7 01

derento de
agravios de 16 cp

Quejoso: [REDACTED]

Autoridad: Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Asunto: Se interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de 28 de junio de 2019.

OFICIO: LXIV/DAYCC/REC [REDACTED]

Ciudad de México, 15 de julio de 2019.

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

La suscrita Licenciada **Eunice Ortigosa Vélez**, en mi carácter de Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 párrafo tercero de la Ley de Amparo, en representación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ante ese Juzgado de Distrito con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

Con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 83, 84, 86, 87 y 88 de la Ley de Amparo, vengo a interponer en tiempo y forma recurso de revisión en contra la sentencia de 28 de junio de 2019, emitida por ese Juzgado de Distrito, dictada en el expediente [REDACTED] misma que fue notificada en esta Cámara de Senadores el 1 de julio del año en curso, mediante oficio [REDACTED]

Para efecto de lo anterior, me permito anexar al presente, el correspondiente oficio de expresión de agravios y copias de traslado; con la finalidad que sean remitidas por conducto de ese Juzgado de Distrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en Turno.

Por lo anteriormente expuesto, a ese **Juzgado de Distrito**, atentamente pido se sirva:

Primero. - Tenerme por presentado con la personalidad que tengo debidamente reconocida en autos del presente juicio, interponiendo en tiempo y forma, recurso de revisión en contra de la sentencia de 28 de junio del año en curso, en representación de la Cámara de Senadores.

Segundo. - Remita el oficio del recurso de revisión en términos de lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en Turno, para su debida substanciación.

PROTESTO LO NECESARIO


LIC. EUNICE ORTIGOSA VÉLEZ
DIRECTORA DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.



RESERVADO
AGRAVIOS
SEIS COPIAS
13531

JUL 16 9 00 AM 2019

JUZGADO OCTAVO
DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL



CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

DIRECCIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Juicio de Amparo: [REDACTED]

Quejoso: [REDACTED]

Autoridad: Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Asunto: Se interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de 28 de junio de 2019.

OFICIO: LXIV/DAYCC/REC [REDACTED]

Ciudad de México, 15 de julio de 2019.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO EN TURNO.

La suscrita Licenciada **Eunice Ortigosa Vélez**, en mi carácter de Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 párrafo tercero de la Ley de Amparo, en representación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Madrid número 62, Mezanine, Col. Tabacalera, c.p. 06030, en esta Ciudad de México; ante ese Tribunal Colegiado con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:



REPUBLICA
EDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO
TERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO
CIUDAD DE MÉXICO

Con fundamento en los artículos 81, fracción I inciso e), 83, 84, 86, 87 y 88 de la Ley de Amparo, vengo a expresar los agravios que le causa a mi representada, la sentencia de 28 de junio de 2019, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo [REDACTED], notificada en esta Cámara de Senadores el 1 de julio del año en curso, mediante el oficio 8420/2019.

PROCEDENCIA DEL RECURSO

El presente recurso de revisión es procedente de conformidad con lo establecido en los artículos 81, fracción I inciso e), 84, 86, 87 y 88 de la Ley de Amparo, preceptos legales que a la letra establecen:

"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:

(...)

e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia

(...).

Artículo 84. Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno.

Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.

La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación.

Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación.

Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada.



CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

DIRECCIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

5

Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia.

En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes. Esta exigencia no será necesaria en los casos que el recurso se presente en forma electrónica.

Cuando no se haga la transcripción a que se refiere el párrafo primero o no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, se trate de menores o de incapaces, o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes."



Lo anterior, en virtud de que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, emitió sentencia definitiva dentro del juicio de amparo [REDACTED] el 28 de junio de 2019, por medio del cual resolvió ilegalmente, conceder el amparo a la parte quejosa [REDACTED].

FUENTE DEL AGRAVIO

1.- La sentencia de 28 de junio de 2019, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se considera gravosa respecto de sus considerandos identificados como **CUARTO** y **QUINTO**, así como el resolutivo **ÚNICO**, mismos que solicito en base al principio de economía procesal se tengan por reproducidos como si a la letra se insertaran.

2. **Preceptos legales indebidamente analizados y aplicados** los numerales 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, vigente.

AGRAVIO

Primero. - Deviene en ilegal la sentencia que en esta vía se impugna, por medio de la cual resolvió ilegalmente conceder el amparo a la parte quejosa [REDACTED] declarando el incumplimiento del mandato constitucional consagrado en los artículos **SEGUNDO** y **CUARTO** transitorio del *Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares)*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, y que entró en vigor el dieciséis de septiembre del mismo año, puesto que el Congreso debía de realizar las adecuaciones pertinentes para la implementación de la reforma constitucional en un plazo no mayor a 180 días naturales, después de su publicación o entrada en vigor, obligaciones que vencieron en el mes de marzo de 2018, sin que se emitiera el Código nuevo ni reformado los existentes, para que se procure la correcta implementación de la Nueva Justicia Cotidiana, transgrediendo así el contenido de los artículos 16, 17 y 73, fracción **XXX** Constitucionales; así como los derechos de desarrollo, derecho humano de legalidad, acceso a la justicia y seguridad jurídica, y los diversos principios constitucionales que rigen la función pública y la administración de recursos económicos del Estado.

Determinación del A quo, que resulta contraria a derecho, toda vez que inadvirtió que la parte quejosa carecía de interés jurídico y legítimo, para incoar el presente juicio de amparo, además de que la concesión de éste, no produciría efecto en su esfera jurídica, por lo que se actualizaba la causal prevista en el **artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo**, que de manera errónea declaró infundada el A quo, en la sentencia recurrida, ello en razón de que se inobservó lo siguiente:



CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

DIRECCIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

6

El criterio emitido por el **Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** en relación con el interés legítimo en la [REDACTED] resuelta en sesión de 5 de junio de 2014, en la que se destacan los siguientes aspectos.

- El interés se refiere al vínculo entre determinada esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, mediante la cual se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción.
- Puede ser clasificado de diferentes formas, entre las que se encuentra, atendiendo al número de personas afectadas, por el acto reclamado, a saber: individual, colectivo o difuso y en relación al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, como: el interés simple, el legítimo y jurídico.
- El **interés simple**, implica el reconocimiento de una **legitimación para cualquier individuo, por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad**, lo que se denomina como acción popular; el **interés jurídico**, es el que se identifica con la **titularidad de un derecho subjetivo**, en sí, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma.

- El **interés legítimo**, se trata de una **legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple**, en virtud de que **no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero no implica que cualquier persona pueda promover la acción**, ya que sólo requiere de una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea por intromisión directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico.

Implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de manera que la anulación del acto reclamado produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, sea actual o futura pero cierta. Pero, esa titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica requiere de un interés actual y real, no hipotético, en razón de que se encontraría referido al interés simple.

Es así, que el interés legítimo, requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no sólo en una cuestión patrimonial), valorada bajo un parámetro de razonabilidad y no como una simple posibilidad, de que una eventual sentencia de protección constitucional implicaría un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso llegue a dictarse.

- La **medida de razonabilidad**, se avoca al hecho de que la **afectación** a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio **debe ser posible**, esto es, **debe ser razonable la existencia de tal afectación**, por lo que ese concepto, se refiere a la **lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida**.
- En el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, **sin que requiera provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico**, es decir, tal situación goza de una **lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos**.
- A efecto de considerar si el demandante tiene interés legítimo es insuficiente su manifestación, ya que debe ser acreditado, aunque no existe impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, concluya que sí se actualiza.

A manera de resumen, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas del **interés legítimo** son:

- a) La **existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona** que comparece en el proceso.
- b) El **vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico**, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.



CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

DIRECCIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

- c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, **implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a Intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos.** En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción.
- d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.
- e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida.
- f) El quejoso tiene un interés propio, distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen en conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio.
- g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial.
- h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible, pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo.
- i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- j) El interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, **el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.**

El criterio en mención dio origen a la jurisprudencia siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2007921

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I

Materia(s): Común

Tesis: P./J. 50/2014 (10a.)- Página: 60

INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos

derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. **En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.** Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el **interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo.** Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del **interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica,** ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.

Expuesto lo anterior, en el juicio que nos ocupa, la quejosa refiere como acto reclamado lo siguiente:

- La Omisión Legislativa en que ha incurrido el Congreso de la Unión, de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar o Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, atendiendo a que ha transcurrido en exceso el plazo con que contaba para ello.

En el escrito de demanda, la quejosa manifestó contar con **un interés legítimo** para solicitar el amparo y protección de la justicia federal, porque **aduce estar acreditado el vínculo con su objeto social que contempla, entre otros, el de "Pugnar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho", así como el "Defender los intereses individuales y colectivos de los asociados y aspirantes, en los términos que establecen estos estatutos".**

Agrega que, **su objeto social se ve restringido** en razón de que no sólo **se incumple con el mandato constitucional**, sino que también se le **priva de contar con una normativa adjetiva en materia civil y familiar** como conducto para gozar de manera plena del derecho a la igualdad en la ley, además de acceder de manera efectiva a la justicia.

Argumenta que, la omisión legislativa contra un mandato expreso a la constitución de implementar legislación para fortalecer y hacer más efectivo el acceso a la justicia en materia cotidiana, la justicia oral y la implementación de legislación en materia de procedimientos civiles y familiares, son parte integrante de lo que los estatutos le obligan a actuar para garantizar el efectivo cumplimiento e implementación de la norma constitucional, con lo que aduce, acredita la especial posición frente a la norma y los actos reclamados.

Precisado lo anterior, **debe quedar acreditado que, con motivo de las omisiones reclamadas, se produjeron efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa en sentido amplio (interés legítimo), ya sea directa o indirecta por su situación especial frente al ordenamiento.**



CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

DIRECCIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

9

Asimismo, debe quedar demostrada la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto.

En ese orden, se requiere conocer cuál es el interés actual y real de la parte quejosa y no hipotético en relación con la titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica.

De manera que, debe examinarse el principio de razonabilidad, esto es, el hecho de que la afectación sea posible y la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, en relación con los derechos fundamentales que se consideran violados, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto.

En el caso, la parte quejosa para acreditar la afectación a su esfera jurídica en sentido amplio (interés legítimo), exhibió con su escrito de demanda el siguiente medio de convicción:

- I. Copia certificada del instrumento notarial número cincuenta y seis mil seiscientos once, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del notario público No. 201 de la Ciudad de México, que contiene la constitución de la persona moral denominada [REDACTED]

Documental con la cual acredita que dentro de su objeto social, se encuentran:

AL DE LA
CIÓN
COLEGIADO
CIVIL DEL
RCUITO
MÉXICO

- 1.- Pugnar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho.
- 2.- Defender los intereses individuales y colectivos de los asociados y aspirantes, en los términos que establecen estos estatutos.

Del objeto social de la parte quejosa, se advierte -entre otros- que lo que se constituye es el pugnar o apelar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho.

Acorde a lo referido, la documental que exhibió la impetrante de garantías es insuficiente para demostrar el interés legítimo con el que promueve el juicio de amparo en estudio, toda vez que no está acreditado que con motivo de las omisiones reclamadas, se produjeron efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa en sentido amplio (interés legítimo), ya sea directa o indirecta por su situación especial frente al ordenamiento.

Tampoco está demostrada la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto, en razón de que la oposición especial de la quejosa frente al orden jurídico y el beneficio cierto que reportaría la concesión del amparo, no se prueba simplemente por el hecho de que su objeto social contemple la promoción y defensa de los derechos humanos y la realización de eventos que incrementen, fomenten y apoyen la defensa de dichos derechos para la población en general, pugnando por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho.

La quejosa para demostrar el interés legítimo que aduce tener, se encontraba obligada a acreditar el ejercicio de su objeto social, no sólo con las manifestaciones que vertió en el escrito inicial, en el sentido de que con la implementación del Código Único, se permitirá minimizar las formalidades procedimentales, privilegiando la solución eficaz de los conflictos en las acciones judiciales.

Se afirma lo anterior, en razón de que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal en la ejecutoria transcrita -contradicción de tesis 111/2013-, se pronunció en el sentido de que:

"... En cualquier caso, resulta pertinente hacer una aclaración: la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse..."

En este orden, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 566/2015, en sesión de 15 de febrero de 2017, estableció que:

EOV/IOC/LRC.

DOMICILIO: Madrid 62, Mezanine, Col. Tabacalera, c.p. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono: 51-30-15-54 (directo), 51-30-22-00 ext. 1567 y 6011.



CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

DIRECCIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

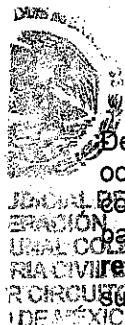
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

10

"... Cabe aclarar, que **su posición especial frente al orden jurídico no se prueba simplemente por su interés en actividades culturales, sino también porque estos quejosos demostraron realizar dichas actividades** en [...]. Por tanto, no podría considerarse que dichos quejosos obtendrían un beneficio actual y cierto si no hubieran probado que podrían tener acceso a dicho complejo cultural..."

Además, la **Primera Sala** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el [REDACTED], en sesión de **15 de noviembre de 2017**, hizo referencia al a [REDACTED] y precisó lo siguiente:

"Finalmente, en el [REDACTED] la Primera Sala retomó la doctrina antes expuesta para sostener que en el caso concreto que varios artistas y promotores de la cultura que reclamaban la omisión de finalizar el proyecto denominado "Ciudad de las Artes" de Tepic, Nayarit, **tenían interés legítimo para acudir al juicio de amparo**. En dicho asunto se determinó que **los quejosos demostraron su situación especial frente al orden jurídico, al mostrar su interés en actividades culturales y acreditar que las realizaban en la ciudad de Tepic.**"



De los precedentes en análisis, válidamente se puede llegar a la conclusión en el asunto que nos ocupa, que el supuesto **del interés legítimo que arguye la parte quejosa**, relativo a que se cuenta con una especial situación frente al derecho cuestionado, **se prueba** no sólo con el objeto social para el cual fue constituida la sociedad civil, sino con diversos **documentos que acrediten la realización de actividades que lleva a cabo con motivo del mismo**, cuestión que encuentra sustento en el criterio siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2009188

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I

Materia(s): Constitucional, Común

Tesis: 1a. CLXXI/2015 (10a.)

Página: 428

DERECHO A LA EDUCACIÓN. PARA QUE LAS ASOCIACIONES CIVILES PUEDAN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO A RECLAMAR SU INCUMPLIMIENTO, DEBEN ACREDITAR QUE SU OBJETO SOCIAL TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA EDUCATIVA, ASÍ COMO PROBAR HABER EJERCIDO ESA FACULTAD.

El derecho a la educación es una estructura jurídica compleja en la que se comprenden diversos derechos y obligaciones, por lo que su garantía no sólo corre a cargo del Estado, sino también de **las asociaciones civiles** encargadas de su defensa, las cuales tienen la facultad de verificar su efectividad. Así, para que estas personas jurídicas **puedan acudir al juicio de amparo para reclamar el incumplimiento por parte de las autoridades** respecto de las obligaciones en materia educativa, deben acreditar que su objeto social tiene como finalidad verificar el cumplimiento de ese derecho, en atención a que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige, para acudir al juicio referido, la existencia de una especial situación frente al orden jurídico, por lo que ésta puede acreditarse con el vínculo entre el derecho humano reclamado y la persona que comparece en el proceso. En esas condiciones, cuando en el amparo se defiende el derecho a la educación en sus distintas facetas, como las relativas a la existencia de instituciones y programas de enseñanza accesibles a todos, sin discriminación, tanto en el aspecto material como en el económico, así como su aceptabilidad en la forma y el fondo, aunado a la flexibilidad requerida para adaptarse a las necesidades sociales y de las comunidades, se concluye que la asociación civil se encontrará involucrada dentro del espectro de este derecho, si en atención a su objeto social puede participar directa y activamente para realizar alguna de las actividades y obligaciones impuestas por la Constitución Federal y los ordenamientos internacionales respecto a la efectividad del derecho a la educación; aunado a ello, **no basta que dichas facultades estén enunciadas en su objeto social, sino que la asociación civil debe probar que las ha ejercido.**

Por lo que, en el juicio que nos ocupa el A quo inadvierte que **la parte quejosa** únicamente exhibió un instrumento notarial con el que pretende demostrar su objeto social, **sin que exhibiera diversos medios de convicción para acreditar que realiza las actividades como parte de la sociedad**

EOV/IOC/LRC.

DOMICILIO: Madrid 62, Mezanine, Col. Tabacalera, c.p. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono: 51-30-15-54 (directo), 51-30-22-00 ext. 1567 y 6011.



CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

DIRECCIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

11

civil que refiere, razón por la cual, **no acredita el interés legítimo** con el que acude a esta instancia constitucional, toda vez que **no quedó demostrado que con motivo de las omisiones reclamadas, se hubiese afectado su esfera jurídica en sentido amplio (interés legítimo).**

Asimismo, inadvirtió que **no quedó acreditada la existencia de un vínculo entre la parte quejosa y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto otorgara un beneficio actual o futuro pero cierto**, ya que con la copia certificada del instrumento notarial número cincuenta y seis mil seiscientos once, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, pasado ante la fe del notario público No. 201 de la Ciudad de México, que acompañó al escrito inicial, en todo caso, **sólo demuestra un Interés simple.**

Sirve de apoyo a lo expuesto, el criterio jurisprudencial siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2012364

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II

Materia(s): Común

Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.)

Página: 690

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.

La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que **el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido.** En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, **cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

No es óbice a lo expuesto, que la parte quejosa también haya sustentado su interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo, en **la resolución de 15 de noviembre de 2017**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el **amparo en revisión 1359/2015**, en virtud de que la mencionada Sala además de lo manifestado en párrafos que anteceden, también estableció lo siguiente:

"(...)

Ahora bien, en el caso que nos ocupa la quejosa señala que la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, tal como lo ordena el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014, viola su derecho a la libertad de expresión. En este orden de ideas, la quejosa argumenta que la legislación reglamentaria omitida tiene como objeto generar herramientas para evitar que el gasto en comunicación por parte de los gobiernos deje de funcionar como una forma de censura a la libertad de expresión. De acuerdo con la quejosa, al ser una organización de la sociedad civil que se ha dedicado a documentar y denunciar la utilización de publicidad oficial como un método de censura, la omisión reclamada claramente dificulta el cumplimiento de su objeto social y le impide contar con las herramientas legislativas necesarias para defender las causas que representa.

En primer lugar, esta Primera Sala advierte como hecho notorio que la asociación Artículo 19 constituye el capítulo mexicano de una organización internacional del mismo nombre (Article 19) con sede central en Londres, fundada en 1987 con el propósito de



CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

DIRECCIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

12

defender el derecho a la libertad de expresión en el mundo, y que actualmente cuenta con oficinas en todos los continentes y con asociaciones debidamente constituidas y registradas en países como Reino Unido, Bangladesh, Brasil, Kenia, Senegal, Túnez, Estados Unidos y México.

De la revisión de sus estatutos, esta Primera Sala advierte que efectivamente la asociación Artículo 19 tiene por objeto promover la investigación, enseñanza y defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos a la libertad de expresión, prensa e información; así como busca promover, patrocinar e impartir cursos, estudios, encuestas, programas de radio y televisión y congresos, entre otros, que tengan como propósito la capacitación, investigación y difusión sobre temas de libertad de expresión. Al mismo tiempo, como parte de su objeto social la quejosa se dedica a litigar casos de libertad de expresión, en donde se presume que se hayan violado tales derechos, así como analizar y brindar asesoría en cuanto al contenido, reformas, aplicación y cumplimiento de las leyes de acceso a la información.

En este sentido, en nuestro país la quejosa ha brindado su apoyo a numerosas personas que defendían su derecho a expresarse libremente, como son los casos de

JUDICIAL DE LA
DEFENSA
FEDERAL COLEGIADA
EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

resueltos por esta Primera Sala, en los que se estableció la inconstitucionalidad de tipos penales que violaban la libertad de expresión. Además, la quejosa ha documentado la violencia para censurar a los medios de comunicación, en lo que cobra especial relevancia su intervención en la investigación que reveló el gobierno mexicano podría estar usando el software Pegasus —una tecnología especial para realizar intervenciones de aparatos telefónicos y comunicaciones— para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.

Finalmente, en materia de publicidad oficial, la asociación quejosa (junto con la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación) han presentado diversos informes sobre gastos en comunicación social y la manera en la que se adjudica la publicidad oficial en nuestro país, entre los que destacan los siguientes: "Informe Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial"; "Boletín Libertad de expresión en venta. Informe sobre el gasto de publicidad oficial"; y "Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013, primer año del presidente Enrique Peña Nieto".

Así, para esta Suprema Corte resulta evidente que la principal actividad de la asociación Artículo 19 es la promoción y protección de la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva; actividad que ha llevado a cabo en sus más de nueve años de operaciones en México, en los cuales ha documentado y denunciado las agresiones que sufren los periodistas, medios de comunicación y personas que en general ejercen su derecho a la libertad de expresión.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto esta Primera Sala entiende que Artículo 19 acreditó tener un especial interés en la defensa y promoción de la libertad de expresión, al tiempo que la omisión que reclama afecta su capacidad de cumplir con el objeto para el que fue constituida, de tal manera que la eventual emisión de la legislación omitida le reportaría un beneficio determinado, actual y cierto para la quejosa: estar en la posibilidad de cumplir de manera cabal con el objeto social para el que la asociación fue constituida.

(...)"

De lo anteriormente expuesto, se colige que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en la referida resolución, **tuvo por acreditado el interés legítimo de la ahí quejosa, con la exhibición de diversas documentales con las que demostró las actividades que realiza vinculadas con su objeto social**, por lo que si en el juicio que nos ocupa, como se precisó con anterioridad, el H. Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, inadvirtió que **la parte quejosa no exhibió los medios de convicción con los que acredite las actividades que efectúa, por virtud de su objeto social**, se pone de manifiesto que **no demostró el interés legítimo con el que instauró el juicio de amparo en estudio**.

Conforme a los argumentos referidos, **se prueba** que el A quo, no debió desestimar la **causal de improcedencia** prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, al no demostrar la

EOV/IOC/LRC.

parte quejosa su interés jurídico y legítimo, para incoar en el presente juicio de garantías, ya que es claro que el simple objeto social de la asociación civil quejosa, no puede considerarse como el único elemento para valorar la existencia de éstos, sino que es necesario analizar los derechos fundamentales, en este caso la omisión legislativa reclamada y la transcendencia de dicha afectación en la esfera específica del derecho cuestionado, para concluir si existe este interés cualificado que se exige en el ordenamiento constitucional; situaciones que no fueron acreditadas, por lo que la resolución que dictó el H. Juzgado de Distrito, lo procedente era que se negara el amparo y protección solicitados.

Segundo. - Resulta inconstitucional la resolución emitida por el H. Juzgado Octavo de Distrito, ya que contrariamente a lo determinado por éste, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 73 y 77, fracción II - interpretado a contrario sensu-, de ese mismo ordenamiento y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, toda vez que el A quo inadvierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, ello con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, debido a que en caso contrario, constituye un motivo de improcedencia que esa restitución resulte inalcanzable.



DIC. DE LA
RACÓN
NAL COLEGIADO
IA CIVIL DE
CIRCUITO
DE MEXICO

Por lo tanto, para sustentar lo anterior, es necesario transcribir el objeto social de la persona moral quejosa, conforme a las actividades que ella misma resalta en su escrito inicial, el cual es al tenor siguiente:

"Artículo 2º. El objeto y fin de la Asociación es:

(...)

A). - Fomentar en sus asociados y en la sociedad el espíritu de equidad, de justicia y de lucha por la plena realización de la seguridad, la justicia y la defensa de todos los principios del derecho.

B). - Pugnar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho.

C). - Procurará el decoro y la dignidad de la abogacía para que su ejercicio se ajuste estrictamente a las normas de la moral, del derecho y del Código de Ética Profesional adoptados por la Asociación.

D). - Fomentar entre los asociados y aspirantes a asociados, el estudio y la difusión del derecho, a fin de lograr una vigora cultura jurídica, para lo cual procurará: preparar estudios jurídicos, realizar investigaciones jurídicas y Ejercicio Profesional e instituir programas de educación e investigación jurídica continua; llevar a cabo seminarios, simposios, coloquios, foros, conferencias, debates y convenciones, así como elaborar y publicar obras de carácter científico y jurídico.

E). - Reunir a los abogados en colegio, para los fines legales pertinentes.

F). - Defender los intereses individuales y colectivos de los asociados y aspirantes, en los términos que establecen estos estatutos.

(...)"

(Lo subrayado es propio de la quejosa)

De lo antes señalado, se desprende que como se señaló en el agravio anterior la parte quejosa no está constituida con la finalidad de intervenir de manera concreta en la eficacia de los derechos que se tutelan en la reforma constitucional, sino que de forma abstracta se delimita, como ella misma lo destaca, **pugnar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho, así como el de defender los intereses individuales y colectivos de sus asociados y aspirantes, en los términos que establece su estatuto**, cuestión que inadvirtió el H. Juzgado de Distrito.



CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

DIRECCIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

14

En este sentido, el A quo inadmite que al otorgar una eventual concesión del amparo, no tendría ningún efecto restitutivo toda vez que la parte quejosa [REDACTED] puede llevar a cabo su objeto social sin que exista una restricción de acción u omisión para acudir ante los órganos competentes a accionar la impartición y administración de justicia, ya que el artículo QUINTO transitorio del *DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares)*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, permite que los procedimientos civiles y familiares sigan substanciándose ante los órganos respectivos, hasta en tanto entre en vigor la legislación correspondiente; en este sentido la concesión de la protección federal no otorgaría beneficio alguno a la parte quejosa, ya que a la fecha puede desempeñar su objeto social.

El artículo QUINTO transitorio en mención, prevé lo siguiente:

QUINTO. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, adicionada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma.

AL DE LA
CIÓN
COLEGIADO
CIVIL DEL
QUINTO
MÉXICO

Lo anterior, confirma que la quejosa no cuenta con una posibilidad de defensa específica de los derechos que postula la reforma, sino genérica, toda vez que de su objeto social se evidencia que no se trata de una persona jurídica dedicada a garantizar los derechos antes precisados, sino sólo la legalidad y constitucionalidad de los actos de autoridad, por lo que no se puede considerar que cuente con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico, ya que no se advierte que se hubiera impedido alcanzar uno de esos fines, conforme a su objeto social.

En este sentido, deviene ilegal la resolución del H. Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 73 y 77, fracción II -interpretado a contrario sensu-, de ese mismo ordenamiento y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acorde a lo anterior, que resulte contrario a derecho la sentencia de 28 de junio de 2019, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y conforme a derecho lo procedente era que se negara el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en el juicio de origen.

[REDACTED]
carece de motivación y de fundamentación, por los argumentos que preceden, y se sirva:

Primero. - Tenerme por presentado con la personalidad que tengo debidamente reconocida en autos del presente juicio, expresando los agravios que causa a mi representada la sentencia de **veintiocho de junio de dos mil diecinueve**.

Segundo. - Revocar la sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la Quejosa.

PROTESTO LO NECESARIO

LIC. EUNICE ORTIGOSA VILEZ.

DIRECTORA DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.





PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

JUZGADO OCTAVO
DE DISTRITO
EN MATERIA CIVIL

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

C/SETE Mesa
Jul 16 3 00 AM 2019

125/0

C/SETE Mesa
Jul 16 3 00 AM 2019

18

2019 JUL 15 P 5 49

QUEJOSA:

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN

MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A

PRESENTE.

El suscrito Lic. Juan Uribe Mejía, Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 70, segundo párrafo y 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso I) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 9 de la Ley de Amparo; personalidad que acredito con el Acuerdo de Delegación de Facultades de fecha 07 de enero de 2019, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 01 de febrero de 2019; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones las oficinas que ocupa la Dirección General de Asuntos Jurídicos, sita en Av. Congreso de la Unión No. 66, Edificio E, Piso 4, Colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, Código Postal 06700; designando como delegados a los Licenciados en Derecho: Luis Genaro Vázquez Rodríguez, Eduardo López Falcón, Leonel Iván García Sánchez, Juan Manuel Mendoza Muñoz, María Teresa Zapata Guerrero, Juan Mario Guerrero Monroy, Josué Martínez Tamayo, Nicolás Rangel Viguera y Domingo Alejo López Cortés, así como a los pasantes en derecho: Eduardo Sámano López de Llergo, Jonathan Eduardo Lozano Torres, Luis Ángel Ruíz Sánchez, Salvador Becerra Peláez e Irving Rivera Carballo; con el debido respeto, comparezco y expongo lo siguiente:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, VI, VII y VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 84, 87 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, interpongo **RECURSO DE REVISIÓN** en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de garantías al rubro citado, a través de la cual se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de un acto atribuido a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

I. PROCEDENCIA Y LEGITIMACIÓN PROCESAL DEL RECURSO DE REVISIÓN.

En términos de lo dispuesto por el artículo 81, fracción I, inciso e) y 87 de la Ley de Amparo, el presente recurso de revisión es procedente, ya que se interpone contra

protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto de actos atribuidos a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Existe legitimación procesal del suscrito para presentar el presente recurso de revisión en representación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, quien funge como autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto que nos ocupa, según lo dispuesto por los artículos 9 y 87 de la Ley de Amparo:



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

19

"Artículo 9o. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurren a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos.

El Presidente de la República será representado en los términos que se señalen en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico, en el Procurador General de la República o en los secretarios de estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En el citado acuerdo general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos.



JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
JUNTA COLEGIAL
DE LA SALA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la República y de las entidades federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos.

Cuando el responsable sea una o varias personas particulares, en los términos establecidos en la presente Ley, podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado.

"Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación.

(...)"

El mencionado tercer párrafo del artículo 9 de la Ley de Amparo, tiene como finalidad que los Órganos Legislativos Federales acudan al juicio de amparo mediante los titulares de sus oficinas de asuntos jurídicos o sus representantes legales, teniendo éstos la facultad legal de interponer los recursos dentro del juicio, que conforme a derecho deban presentarse para la protección y defensa de los intereses de los mencionados órganos legislativos a los que representan.

Asimismo, para sustentar la legitimación de esta Cámara de Diputados para interponer el presente recurso de revisión, sirve de apoyo las tesis jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguientes:

"Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Febrero de 2009. Página: 462. Tesis: 2a./J. 14/2009. Jurisprudencia. Materia(s): Común.

REVISIÓN EN AMPARO. LA PERSONA A QUIEN EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DELEGUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, PUEDE INTERPONER DICHO RECURSO EN DEFENSA DE ESE ÓRGANO DEL ESTADO. Conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, los órganos legislativos federales pueden ser



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

representados directamente en el juicio de garantías por los titulares de sus oficinas de asuntos jurídicos o por sus representantes legales, y acorde con el precepto 23, numeral 1, inciso I), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados puede delegar la representación legal en la persona que estime necesario. En ese sentido, la persona designada por el indicado Presidente como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, independientemente de la denominación de su puesto, en caso de ser integrante de la misma entidad, puede legítimamente interponer el recurso de revisión contra la sentencia que conceda el amparo respecto de leyes que emitió, al no encontrarse dicha representación restringida a persona alguna.

Contradicción de tesis 194/2008-SS. Entre las sustentadas por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 28 de enero de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas. Tesis de jurisprudencia 14/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de enero de dos mil nueve. Ejecutoria."



JUDICIAL DE LA
ERACIÓN
UNAL COLEGIADO
RIA CIVIL DEL
R CIRCUITO
DE MÉXICO

Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII. Septiembre de 2008. Página: 231. Tesis: 2a./J. 123/2008. Jurisprudencia. Materia(s): Común.

RECURSO DE REVISIÓN. LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN LO PARTICULAR, Y NO A TRAVÉS DE UNA SOLA PERSONA QUE ACTÚE EN NOMBRE DE AMBAS. Si se tiene presente que las Cámaras de Diputados y de Senadores que conforman el Poder Legislativo Federal tienen atribuciones diferentes, es incuestionable que debe otorgárseles la oportunidad en lo individual de defenderse, a través del recurso de revisión, de los actos que a cada una de ellas se les atribuye en un juicio de amparo en que se declaró la inconstitucionalidad de una ley, porque tratándose de la formación de ésta, aun cuando ambas Cámaras son copartícipes, una será la de origen y la otra la revisora, según la materia a legislar. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que las facultades de las Cámaras pueden ejercerse conjunta o separadamente, pues cuentan con facultades exclusivas y otras que finalizan en decisiones que adoptan como un solo ente, también lo es que la expedición de leyes no puede considerarse como un acto llevado a cabo como asamblea única que las obligue a designar una sola persona y que sea sólo ésta la legitimada para la defensa de los intereses de ambas Cámaras y la correlativa interposición de los recursos y medios de defensa que la ley de la materia otorgue; máxime que a dichas Cámaras se les puede designar como autoridades responsables en lo particular, así se les emplaza, y de la misma manera rinden su informe con justificación. Además, resultaría ilógico que si el procedimiento está integrado de esta manera, para la interposición del recurso de revisión contra una sentencia que consideró inconstitucional la ley, deban combatirla forzosamente como un solo ente a través de una misma persona que actúe en nombre de ambas, ya que el ejercicio de la acción que se confiere en lo individual a cada una de las Cámaras que integran el Poder Legislativo estaría supeditado a la voluntad de la otra, y en caso de no tener el consentimiento de ésta, ninguna podría individualmente recurrir la resolución que le afecta directamente."

Por otro lado, el presente recurso se interpone ante el A quo, acompañando las copias necesarias para su tramitación y resolución, de acuerdo a lo establecido por los artículos 86, 87 y 88 de la Ley de Amparo:



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

21

"Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.

La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación."

"Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación.

(...)"

"Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada.

(...)"



II. OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN.

La oportunidad del presente recurso de revisión, se encuentra debidamente cumplimentada por lo señalado en los artículos 22, 23, 31 y 86 de la Ley de Amparo:

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FISCALÍA GENERAL DE LA
FEDERACIÓN
CIRCUITO DE MÉRITO

"Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.

Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva.

Artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.

Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas:

I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas;

Cuando el oficio que contenga el auto o resolución que se debe notificar se envíe por correo y no se trate de la suspensión, en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente;

(...)"

Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.

(...)"



La sentencia recurrida se notificó a esta autoridad responsable el **02 de julio de 2019**, surtiendo sus efectos el mismo día, por lo que contando los diez días hábiles siguientes que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, el término para interponer el presente recurso de revisión fenece el día **16 de julio de 2019**.

III. COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA RESOLVER EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN.

La resolución del presente recurso, es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo y 10, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En complemento a lo anterior, y de acuerdo con el criterio jurisprudencial de la Primera Sala en donde se establece que para sistematizar y definir el marco en el que debe ejercerse la facultad de atracción en cuestión, y donde se atenderá a los conceptos de "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico, es que cita la referida jurisprudencia para mayor abundamiento:

SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE MÉXICO

"Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Abril de 2008. Página: 150. Tesis: 1a./J. 27/2008. Jurisprudencia. Materia(s): Común.

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

En virtud de lo anterior, la resolución del presente recurso atenderá los aspectos cuantitativos y cualitativos en materia constitucional, por lo que resulta procedente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción.

Ahora bien, previo a demostrar lo infundada que deviene la resolución que se recurre, resulta pertinente señalar el resolutivo que causa agravio a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el cual es del tenor siguiente:



JUDICIAL DE LA
CÁMARA DE LA
LEGISLACIÓN
CIVIL DEL
CIRCUITO
DE MÉXICO

"(...)

Por lo anteriormente, expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se:

RESUELVE:

ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la [REDACTED] por los actos reclamados al Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Diputados y la diversa de Senadores, que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución."

Por ello, se procede a demostrar la afectación que causa a mi representada la sentencia dictada por el A quo, en el capítulo denominado:

AGRAVIOS.

ÚNICO. DEBE REVOCARSE LA SENTENCIA RECURRIDA, EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN I, 61, FRACCIONES XII, Y XXIII, TODOS DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Debe revocarse la sentencia recurrida, tras actualizarse de manera clara y manifiesta la causal de improcedencia previstas en los artículos 5, fracción I, 61, fracciones XII y XXIII, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto que se atribuye a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no le genera perjuicios jurídicamente tutelados por éste medio de control constitucional a la parte quejosa.

Para evidenciar lo anterior, es preciso señalar el contenido de los preceptos invocados de la Ley de Amparo y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen respectivamente lo siguiente:



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo (...)"

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."

"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

(...)

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

(...)"

De los artículos transcritos se desprende que la finalidad del juicio de amparo consiste en que una vez estudiada la constitucionalidad del acto reclamado, éste sea anulado por ser contrario al texto de la Constitución Federal; sin embargo, esa situación no puede darse cuando los promoventes de amparo no acreditan tener interés jurídico y/o legítimo para actuar en los juicios de amparo.

Ahora bien, en la resolución que se impugna, el Juez de Distrito consideró actualizado el interés jurídico de la asociación civil quejosa, por lo siguiente:



"(...)

En otro contexto, también refiere que este juicio es improcedente ya que el acto que le atribuye a la Cámara de Diputados no le ocasiona a la parte quejosa perjuicios jurídicamente tutelados por este medio de control constitucional puesto que la parte quejosa no acredita tener interés jurídico ni legítimo para instarlo.

No le asiste razón a la responsable, ya que de la escritura constitutiva de la persona moral promovente del amparo [REDACTED] se desprende que tiene como finalidad, entre otras: "(...) B.- Pugnar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho".

Dicho propósito lo legitima para reclamar la conducta omisiva absoluta que atribuye a las responsables, máxime que se trata de una colegiación integrada por profesionistas del derecho (abogados); por lo que en el caso sujeto a estudio, se satisfacen los siguientes requisitos:



JUDICIAL DE LA
ERACIÓN
UNAL COLOMBIA
RIA CIVIL DEL
R CIRCUITO
DE MÉXICO

- a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada;
- b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y,
- c) El promovente pertenezca a esa colectividad.

(...)

En el caso en estudio, el requisito señalado en el inciso a) se satisface, porque el numeral 73, fracción XXX constitucional establece la facultad del Congreso para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Por tanto, existe un interés "difuso" en la colectividad de que exista uniformidad en todo el país respecto de las normas que deben regular tales materias (por seguridad jurídica...

Asimismo, se cumple el segundo requisito b), puesto que si existe mandato constitucional de expedir tal ley por parte del Congreso de la Unión, así como de emitir las adecuaciones necesarias a las leyes generales y federales correspondientes y no se ha observado, crea inseguridad jurídica en los gobernados, quienes son los destinatarios de las normas expedidas.

Finalmente la tercera exigencia se observa, porque la persona moral quejosa es una sociedad mexicana legalmente constituida, y además, persigue como finalidad "Pugnar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho"; por lo que pertenece a la colectividad a la que está dirigido el interés difuso señalado.

Por lo que se colige que la parte quejosa cuenta con un interés legítimo para instar el presente juicio de amparo."

De la sentencia que se impugna se desprende que el Juez de Distrito estimó actualizado el interés jurídico de la asociación civil quejosa, por considerar que su objeto social le permite impugnar omisiones legislativas, aunado a que la impetrante de garantías supuestamente cuenta con interés difuso derivado de que perteneciente a un grupo identificable que le otorga legitimación para reclamar la omisión legislativa que atribuye a este Órgano Legislativo.

No obstante lo manifestado por el Juez del control Constitucional, se considera que deberá revocarse la resolución que se recurre, y en su lugar decretar el



sobreseimiento del juicio de amparo en virtud de que la quejosa no allegó al Juzgador elementos de convicción suficientes para acreditar su interés jurídico o legítimo con el que promueve el juicio de amparo en estudio.

Ello, porque los medios de convicción aportados por la parte quejosa no acreditan que con motivo de las omisiones reclamadas, se hubieran producido efectos en su esfera jurídica en sentido amplio (interés legítimo), ya sea directa o indirecta por su situación especial frente al ordenamiento.

Además, no se observa demostrada la existencia de un vínculo entre la persona y la pretensión; es decir, la anulación del acto reclamado (omisión) no podría producir un beneficio actual o futuro pero cierto, que se materialice en la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa.

Lo anterior se manifiesta porque la posición especial de la quejosa frente al orden jurídico y el beneficio cierto que reportaría la concesión del amparo, no se prueba simplemente por el hecho de que su objeto social contempla la protección y defensa de los intereses individuales y colectivos de sus asociados y de las personas pugnado por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho.

En efecto, la parte quejosa para demostrar el interés legítimo que aduce tener, tuvo que demostrar el ejercicio de su objeto social, y el Juez de Distrito no tuvo que tenerlo por acreditado sólo con sus manifestaciones en el sentido de que "éste se acredita por la trayectoria de la propia asociación, o de que la integran un grupo de abogados profesionistas del derecho", así como la trayectoria de sus asociados en la defensa y promoción del derecho de acceso a la justicia y seguridad jurídica.

Por el contrario, el quejoso tuvo que acreditar el interés que adujo tener con medios de prueba que demuestren la realización de las actividades que menciona.

Lo cual, *ratio decidendi*, es acorde a lo pronunciado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, [REDACTED] quien tuvo por acreditado el interés de la parte quejosa que actuó en dicho juicio, con la exhibición de diversas documentales con las que demostró las actividades que realiza vinculadas con su objeto social; de ahí, que deba ser revocada la protección Constitucional otorgada por el Juez de Distrito ya que la parte quejosa no demuestra en el actual juicio de amparo el interés legítimo con el que instaura la acción Constitucional en estudio.

De lo que se sigue que ese Tribunal Revisor tendrá que considerar que en el presente asunto se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en los artículos 5, fracción I, 61, fracciones XII y XXIII, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto que se atribuye a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, **no le genera perjuicios jurídicamente tutelados por éste medio de control constitucional a la parte quejosa.**

Para dar claridad suficiente en torno a la actualización de la causal de improcedencia propuesta, debe tener presente ese Tribunal de Alzada que el interés jurídico otorga al particular un derecho para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales o convencionales en su perjuicio; es decir, la afectación de



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular provocada por un acto de autoridad.

Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendiente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés particular, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato.

En esa virtud, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos o legítimos de un particular.

Tal como prolijamente lo refiere la tesis de contenido siguiente:

"No. de registro: 2003608. I.8o.A.4 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Pág. 1888.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
COLEGIADO
DE LA CIVIL DEL
CIRCUITO
DE MÉXICO

INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011. SUS DIFERENCIAS. Conforme al artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 4 de octubre de 2011, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. En congruencia con las definiciones que de una y otra clase de interés ha proporcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, Séptima Parte, página 55 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, páginas 241 y 242, estas últimas con claves o números de identificación 2a./J. 141/2002 y 2a./J. 142/2002, de rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.", "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." e "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.", respectivamente, pueden identificarse, a partir de cuatro elementos de los que participan ambos tipos de interés, algunos rasgos característicos que los diferencian, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los cuales son: a) titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que del legítimo, un grupo de personas; b) poder de exigencia del titular: tratándose del primero es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio exclusivo, mientras que en el segundo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) norma de la que surge: tratándose del jurídico



se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y d) tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que en relación con el legítimo se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO."

Consecuentemente, no todos los intereses de los individuos adquieren relevancia en la acción constitucional de amparo, es decir, no todas las aspiraciones son consideradas como susceptibles de tutela jurídica en las instancias Federales, de ahí que se tenga que atender a una visión de los diferentes tipos de interés.



JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

Ahora bien, con el fin de acreditar la actualización de la causal de inejercitabilidad declarada infundada por el Juzgador de Distrito, debe recordarse que el quejoso reclamó en la demanda de amparo indirecto:

"(i) La OMISIÓN ABSOLUTA de emitir la legislación única en materia procesal civil y familiar o Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como lo ordena la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución, a efecto de dar operatividad a la reforma en materia de justicia cotidiana dentro del plazo de 180 días previsto por el artículo CUARTO transitorio del DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre de 2017, obligación constitucional sujeta a término que venció desde el 15 de marzo de 2018, sin que se le haya dado cumplimiento a la fecha; incumplimiento continuado que persiste y se configura y renueva día con día.

(ii) La OMISIÓN ABSOLUTA de emitir las adecuaciones necesarias a las leyes generales y federales correspondientes en materia del principio de legalidad en los procedimientos orales en los cuales bastará con que quede constancia que dé certeza del contenido de los mandamientos dictados por las autoridades en los cuales funden y motiven actos de molestia de acuerdo con el contenido del artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se desprende del artículo SEGUNDO Transitorio, del decreto mencionado, a efecto de dar operatividad a la reforma en materia de justicia cotidiana dentro del plazo de 180 días previsto por el artículo SEGUNDO transitorio del DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre de 2017, obligación constitucional sujeta a término que venció desde el 15 de marzo de 2018, sin que se le haya dado cumplimiento a la fecha; incumplimiento continuado que persiste y se configura y renueva día con día.

(iii) La OMISIÓN ABSOLUTA de emitir las adecuaciones necesarias a las leyes generales y federales correspondientes en materia de solución de fondo del conflicto, debiendo puntualizar que las autoridades deberán privilegiar la solución



del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso y otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio de acuerdo con el contenido del artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se desprende del artículo SEGUNDO Transitorio, del decreto mencionado, a efecto de dar operatividad a la reforma en materia de justicia cotidiana dentro del plazo de 180 días previsto por el artículo SEGUNDO transitorio del DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre de 2017, obligación constitucional sujeta a término que venció desde el 15 de marzo de 2018, sin que se le haya dado cumplimiento a la fecha; incumplimiento continuado que persiste y se configura y renueva día con día."

Sin embargo, los actos reclamados por el quejoso no generan derecho alguno en favor de aquel que le permita acreditar su interés jurídico o legítimo para reclamar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; lo anterior, por los siguientes motivos:

Como primer punto, se considera que la supuesta omisión que se reclama de mi representada no le genera un perjuicio jurídicamente tutelado a la quejosa, en virtud de que el interés de la quejosa únicamente se trata de un interés simple, es decir, de un mero interés por la legalidad igual al del resto de los ciudadanos, por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa".

En otras palabras, contrario a lo aducido por el Juez de Distrito, la parte quejosa no cuenta con un derecho subjetivo ni por consiguiente de interés jurídico, atendiendo a que su interés simple no establece en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, puesto que el acto reclamado consistente en la omisión legislativa que se atribuye al Congreso de la Unión consiste en situaciones en las cuales si bien los particulares podrían recibir un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; sin embargo, ello no implica que esos intereses indiferenciados adquieran protección jurídica o particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales¹ para el Estado.

De esa guisa se estima que no se puede sostener que en el presente juicio de amparo la impetrante de garantías cuente con un "interés legítimo individual, colectivo o difuso", atendiendo a que tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión de los promoventes, pero en el caso que nos encontramos, la parte quejosa no cuenta con esa tutela en tanto que la omisión que reclama no le causa agravio jurídico alguno, y sin que sea óbice que la omisión que reclaman les cause algún perjuicio de diversa naturaleza como

¹ Para mayores referencias, consúltese la tesis de rubro: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR."



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

puede ser, por ejemplo, uno meramente económico, aun así su reclamo no puede ser abordado en la presente vía constitucional².

En efecto, debe recordarse que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, establece que: *"El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."* Ahora bien, el interés legítimo tiene sus límites entre el simple y el jurídico, según se aprecia en la obra *"Juicio de Amparo e Interés Legítimo: La tutela de los Derechos Difusos y Colectivos"*, de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Editorial Porrúa, México, 2004, segunda edición, en la cual sostiene que el interés simple es un interés general que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal.

Es decir, el interés que acredita la asociación civil quejosa es idéntico al interés ciudadano por la legalidad, el cual no faculta para accionar el juicio de amparo, sino que únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo permiten, en tanto que no requiere de una condición precisa o de una cualificación subjetiva especial.

Asimismo, en cuanto al interés jurídico, el mencionado autor refiere que se le ha identificado con el derecho subjetivo, consistente en la situación de prevalencia o ventaja que el derecho objetivo concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer o querer y de exigir de otros el respeto hacia esa situación preferencial; y, respecto del interés legítimo precisa que corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular *-ipso iure o ipso facto-* en la que se encuentran, tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no sólo por el mero interés ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, en tanto que resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales con el acto autoritario reclamado, aunque carezcan de un derecho subjetivo, por lo que su característica esencial es la utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder público, aunque es necesario exigir al quejoso la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas: el interés legítimo debe ser personal y actual.

Por lo anterior, resultará inconcuso advertir para ese Tribunal de Alzada que la parte quejosa carece de interés legítimo en el presente sumario de amparo, y por obviedad de razones también carece de interés jurídico, pues su pretensión se basa en un mero interés simple, esto porque **no evidencia con medios probatorios fehacientes** cómo el acto reclamado o sus consecuencias afectan directa o indirectamente sus derechos fundamentales de conformidad con su "especial situación frente al orden jurídico", ni señalan cuál sería esa situación concreta que se vería afectada o beneficiada con la concesión o negativa del amparo y menos aún, cuál sería el beneficio real y específico, inmediato o mediato, que en su esfera jurídica concreta pudiera obtener con la regulación de la legalidad de los actos que reclama.

² Véase tesis de localización y rubro: "No. de registro: 2003067, 2a. XVIII/2013 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Pág. 1736. INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO."



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Lo anterior es así, porque si no se alega que efectivamente la omisión reclamada de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión causa una afectación directa o indirecta al promovente de amparo, resulta incuestionable concluir que no basta el interés abstracto en la legalidad de los actos de autoridad para considerar existente un interés legítimo, ni menos un interés jurídico.

Ahora bien, situándonos en el caso especial del quejoso, existe otro argumento donde la promovente de amparo refiere contar con legitimación para acudir al juicio de amparo, en virtud de que el acto reclamado afecta a sus asociados y a la población su capacidad de acceder a determinados ordenamientos, de tal manera que la legislación omitida le reportaría "un beneficio" determinado, actual y cierto, consistente en estar en posibilidad de ejercer derechos no desarrollados por el legislador ordinario.

Los argumentos referidos *supra parr.*, se apoyan en diversos precedentes como el resuelto el once de marzo de dos mil quince; así como el resuelto en sesión de quince de febrero de dos mil

No obstante lo anterior, no se cumplen los diversos requisitos que se han establecido para considerar que una persona como la parte quejosa, puedan acudir al juicio de amparo; y ello obedece a que la Constitución ordena el cumplimiento de diversos requisitos para poder ejercer la acción de amparo, por lo que previo a estudiar los planteamientos del fondo del asunto, es decir, si la omisión reclamada afecta los derechos que aduce tener el quejoso, resulta indispensable analizar que existan las condiciones procesales para estimar procedente el juicio, como lo es el interés legítimo.

En ese aspecto, es de precisar que en la contradicción de tesis 111/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, esto es, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.

Añadió el precedente relativo que el interés legítimo es una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un interés genérico de la sociedad (como ocurre con el interés simple), por lo que una de las características esenciales para configurar dicho interés, consistía en que la concesión del amparo, se tradujera en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, en un efecto positivo en su esfera jurídica, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Elemento que debe analizarse junto con el interés propio que debe tener la parte quejosa, el cual debe ser distinto de cualquier otro gobernado.

Dichos argumentos dieron origen al siguiente criterio jurisprudencial P./J. 50/2014 (10a.), cuyos datos de identificación, rubro y texto señalan:

"Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Página: 60



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS



JUDICIAL DE LA
ERACIÓN
UNAL COLEGIAD
RIA CIVIL DEL
R CIRCUITO
J DE MÉXICO

INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.

Contradicción de tesis 111/2013. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de junio de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó en contra Margarita



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

33

Beatriz Luna Ramos. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González."

Con esos elementos, desde la Constitución y la interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puntualiza que el amparo tiene la posibilidad de remediar las afectaciones a la Constitución y a los derechos humanos que se resientan en una esfera jurídica determinada, por lo que las violaciones o transgresiones a la Constitución que no produzcan esa afectación específica deberán ser combatidas en distintos mecanismos de defensa.

De esa forma, es claro advertir que el interés que aduce tener el impetrante de amparo, no cumple con las exigencias impuestas por la Constitución, la Ley de Amparo y el anterior criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al interés legítimo con el que debe acudir al amparo.

Esto, pues como se abordó en párrafos anteriores, la primer exigencia obliga a que la persona con interés se encuentre en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad; sin embargo, la parte quejosa no demostró a lo largo del juicio de amparo la condición diferenciada que existe frente al resto de la sociedad, ni la afectación diferenciada que justifique acudir al juicio de amparo a reclamar la omisión de emitir la ley.

Lo anterior, pues si bien se trata de una asociación civil que tiene por objeto social llevar a cabo ciertos actos en protección, garantía y defensa de los derechos fundamentales, lo cierto es que no permite advertir su condición diferenciada frente al interés que tiene toda persona y ciudadano para defender dichos derechos.

En razón de ello, la construcción democrática a partir de la condición que aduce tener el quejoso, no permiten identificar por sí misma condiciones individuales que justifiquen el acceso al amparo, de ahí que para determinar el acceso al juicio resulte necesario no sólo analizar la estructura del derecho sino la afectación que ocasiona.

Así, el hecho de que la quejosa aduzca ser titular de derechos, y que acuda a la presente vía en defensa de ellos, no permite considerar la existencia de un interés cualificado para acudir al amparo, en los términos resueltos por la contradicción de tesis 111/2013, en tanto que la protección de los derechos fundamentales es un tema que interesa a toda la sociedad.

De la misma forma, la omisión que se reclama no afecta o vulnera específicamente la esfera jurídica de la parte quejosa, sino la situación de todas las personas y ciudadanos interesados en que el Honorable Congreso de la Unión emita la norma establecida en el Decreto constitucional que se reclama; es por ello que dicho elemento de afectación tampoco permite concluir una situación diferenciada del resto de la ciudadanía para acceder al juicio de amparo.

Una segunda exigencia para acreditar interés legítimo tiene que ver con los efectos de la concesión del amparo, en cuanto a que debe generar un beneficio jurídico actual en la esfera jurídica de la parte quejosa; sin embargo, tampoco se cumple, en virtud de que el beneficio de la concesión no se actualizaría en la esfera de la parte quejosa, sino para toda la sociedad.



En efecto, como se precisó, la parte quejosa no puntualiza ni identifica las consecuencias diferenciadas que se generarían en su esfera jurídica, a partir de la concesión del amparo, según lo exige la Constitución, la Ley y el criterio del Pleno; puesto que para determinar si existe un interés cualificado, es necesario estudiar si el amparo podría generar un efecto positivo en dicha esfera.

En ese aspecto, en el amparo se reclama una omisión por parte de las autoridades responsables, por lo que en atención a lo establecido en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión se traducen en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, por lo que en el caso, el cumplimiento del amparo es ordenar la emisión de una ley.

En razón de ello, una hipotética sentencia concesoria de amparo vincularía al Poder Legislativo a emitir la Ley, por lo que dichos actos no inciden de manera actual en la esfera de la parte quejosa, ni acarrear un beneficio específico, sino por el contrario, con la emisión de la ley, dadas sus características de generalidad y abstracción, el posible beneficio se reportaría a todos los sujetos y no a la parte quejosa; motivo por el cual, desde la perspectiva y condiciones del juicio de amparo que han sido enunciadas, no puede considerarse que la impetrante de garantías acude con un interés cualificado, actual y real.

No pasa inadvertido que la demanda de amparo se fundamenta -entre otros precedentes- en los amparos en revisión 323/2014 y 1359/2015, en los que se determinó que una persona jurídica tiene interés legítimo cuando acude en defensa del derecho a la educación y de su objeto social se desprende dicha defensa; empero, en el juicio de amparo en el que se actúa dichas condiciones no se cumplen.

En dichos precedentes, principalmente en el primero, se precisó que la naturaleza y estructura del derecho a la educación, justificaban e incluso obligaban a la sociedad a intervenir en defensa del derecho a la educación, por lo que las omisiones que se reclamaban trascendían a la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, que para determinar la condición diferenciada era necesario analizar tres elementos:

- a) el derecho cuestionado
- b) la afectación reclamada, y
- c) la trascendencia a la esfera jurídica de la parte quejosa.

Dichas condiciones se desprenden de los siguientes criterios:

*"Época: Décima Época Registro: 2009195 Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Común
Tesis: 1a. CLXVII/2015 (10a.) Página: 442*

INTERÉS LEGÍTIMO DE ASOCIACIONES CIVILES EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR EL DERECHO CUESTIONADO A LA LUZ DE LA AFECTACIÓN RECLAMADA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS



ICIA DE LA
ACIÓN
IAL COLEGIADO
A CIVIL DEL
CIRCUITO
E MÉXICO

I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en cuenta la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, la cual no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino de la aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, por medio del cual pueda reclamar a los poderes públicos que actúen acorde con el ordenamiento, de ahí que con la concesión del amparo debe lograrse un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Así, tratándose del interés legítimo de asociaciones civiles en defensa de derechos colectivos, el juzgador debe realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho, el objeto social de la asociación y la afectación que se alega. Por tanto, cuando una persona jurídica alega la transgresión del derecho a la educación por parte de las autoridades estatales, no procede sobreseer en el juicio por considerar exclusivamente que los reclamos tienen por efecto salvaguardar la constitucionalidad y la legalidad del ordenamiento, sino que es necesario analizar la pretensión aducida a la luz del derecho cuestionado, para determinar la forma en la que dicho reclamo trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que el amparo tendrá por objeto reparar la violación a su esfera jurídica".

"Época: Décima Época Registro: 2009185 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a. CLXXII/2015 (10a.) Página: 426

DERECHO A LA EDUCACIÓN. LA EXISTENCIA DEL AGRAVIO DIFERENCIADO EN UNA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LOS CIUDADANOS, SE ACREDITA CON LA TRASCENDENCIA DE LA AFECTACIÓN A SU ESFERA JURÍDICA CONFORME A LA NATURALEZA DEL DERECHO CUESTIONADO. Atento a la naturaleza del derecho a la educación, existe un agravio diferenciado en una asociación civil respecto del resto de los integrantes de la sociedad, cuando su objeto social consiste en la protección de ese derecho, al no tratarse de una defensa abstracta de él, sino de una defensa específica relacionada estrechamente con el objeto para el cual fue constituida, por lo que obstruir su acceso al juicio de amparo, a su vez impediría que la asociación cumpliera con uno de los fines para los que fue creada. Ahora, si bien es cierto que el interés de cualquier ciudadano y el de una asociación pudieran coincidir en algún punto, ya que ambos tendrían un interés simple para verificar que las autoridades cumplan con sus obligaciones, también lo es que el agravio diferenciado se actualiza en virtud de la naturaleza del derecho a la educación y la protección del objeto social de la asociación; aunado a ello, el hecho de permitir a una persona jurídica, vinculada específicamente a la efectividad del derecho a la educación, cuestionar los actos de las autoridades en el juicio



de amparo, implica el cumplimiento de lo impuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a no obstaculizar el acceso al ejercicio del derecho. Además, una eventual concesión de la protección federal generaría un beneficio específico a dicha asociación, pues podría ejercer libremente su objeto social, con la finalidad de investigar y evaluar las condiciones del derecho a la educación; de ahí que pueda considerarse que tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, pues además de defender el derecho a la educación acude en defensa de su esfera jurídica, al considerar que los actos de las autoridades impiden el cumplimiento de su objeto social..".

Por lo anterior, es claro que el simple objeto social de la asociación civil quejosa no puede considerarse el único elemento para valorar la existencia del interés legítimo, por lo que en el caso es necesario analizar los derechos fundamentales que se estiman vulnerados, la omisión legislativa reclamada y la trascendencia de dicha afectación en la esfera específica del derecho cuestionado, para concluir si existe ese interés cualificado que se exige en la Constitución.

Por esas razones, y contrario a lo expuesto por el Juzgador de Distrito, la persona quejosa no cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo; ello, porque la omisión legislativa reclamada no trasciende en la esfera jurídica de derechos de manera específica en los derechos cuestionados, aunado a que la quejosa no demostró ubicarse en un supuesto diferente al que tienen el resto de los gobernados.

En suma, deberá sobreseerse el presente juicio de amparo, en virtud de que:

- 1) El reclamo del quejoso es tendiente a evidenciar una supuesta "omisión" legislativa; lo cual, como se dijo, no corresponde al rubro de la constitucionalidad, sino en todo caso al de la legalidad;
- 2) El interés del quejoso se trata de un interés simple; es decir, del mero interés ciudadano por la legalidad, el cual no lo faculta para accionar el presente juicio de amparo, ya que no demuestra encontrarse en un plano especial que lo distinga del resto de la generalidad de las personas; y,
- 3) El simple objeto social de la asociación civil de la quejosa no puede considerarse el único elemento para valorar la existencia del interés legítimo, por lo que en el caso es necesario analizar los derechos fundamentales que se estiman vulnerados, la omisión legislativa reclamada y la trascendencia de dicha afectación en la esfera específica del derecho cuestionado, para concluir que no existe ese interés cualificado que se exige en la Constitución.

Por los motivos expuestos en el presente agravio, se considera que ese Tribunal de Alzada deberá revocar la sentencia protectora de amparo, y en su lugar sobreseer el presente juicio de amparo, ante la notoria y manifiesta actualización de los motivos de inejercitabilidad planteados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado;

A USTEDES CC. MAGISTRADOS, atentamente solicito:



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

PRIMERO. Tenerme por presentado en términos del presente ocurso con la personalidad que ostento, teniendo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de revisión adhesivo.

SEGUNDO. En su oportunidad, confirmar el sobreseimiento decretado respecto de los actos atribuidos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

PROTESTO LO NECESARIO
PALACIO LEGISLATIVO FEDERAL, A 11 DE JULIO DE 2019

LIC. JUAN URIBE MEJÍA



H. CÁMARA DE DIPUTADOS

SUBDIRECTOR DE AMPAROS, ASÍ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.



JUDICIAL DE LA
RACIÓN
NAL COLEGIADO
IA CIVIL DEL
CIRCUITO
DE MÉXICO

LIGS. *leo*



CÁMARA DE
DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Gaceta Parlamentaria

Año XXII

Palacio Legislativo de San Lázaro, viernes 1 de febrero de 2019

Número 5210-VI

CONTENIDO

Acuerdos

De la Presidencia de la Mesa Directiva, seis delegatorios de facultades



JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
COLEGIADO
DE CIRCUITO
CIUDAD DE MÉXICO

Anexo VI



CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÓNICA
Y GACETA PARLAMENTARIA

Viernes 1 de febrero

PORFIRIO MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA, Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 77 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso I), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

CONSIDERANDO

Que en términos de lo que dispone el artículo 1º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, es un órgano de representación popular y parte integrante del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se constituye como depositario del Poder Legislativo Federal.

Que el ejercicio del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, corresponde al Presidente de la Mesa Directiva, quien tiene las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Que con fecha 29 de agosto de 2018, se publicó en el Diario de los Debates, la integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, designando como Presidente de la Mesa Directiva para el primer año de la Legislatura LXIV al Diputado Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.

Que dentro de las atribuciones previstas en el artículo 23, numeral 1, inciso I), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le confiere al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, las que **“Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario;”** por lo que al efecto está facultado para delegar en los

Licenciados en Derecho Luis Genaro Vásquez Rodríguez, Ana Monserrat Hernández Ramírez, Fabiola Itzel Miranda Escamilla, Adriana Alejandra Medrano García, Juan Uribe Mejía, Nancy Karina Mendoza Petrearce, Leonel Iván García Sánchez, Juan Mario Guerrero Monrroy, Arturo Hernández Rasgado, Salvador Eduardo Leyte Ballinas, Jorge Antonio López Zarazúa, Juan Manuel Mendoza Muñoz, Nicolás Rangel Vigueras, Josue Ramírez Tamayo, Christian Reyes González, Karla Paola Rodríguez Camacho, Verónica Sánchez López, Ángel Vázquez Gómez y María Teresa Zapata Guerrero, para que conjunta o separadamente ejerzan la representación jurídica de la misma en los juicios y procedimientos contenciosos en los que la Cámara sea parte, desahoguen las solicitudes y requerimientos que, por los conductos legales, formulen las autoridades judiciales y administrativas; promuevan y se desistan el juicio de amparo, antejuicio y absuelvan posiciones, realicen las notificaciones de resoluciones y acuerdos de la Cámara o de alguno de sus órganos, en las materias de su competencia, realicen todo tipo de promociones, así como para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos, recibir copias de traslado, concurren a las audiencias, rindan pruebas y formulen alegatos, promuevan incidentes y recursos que conforme a derecho procedan ante los Tribunales Jurisdiccionales y Autoridades Administrativas en los que la Cámara de Diputados sea parte.

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÓNICA
Y GACETA PARLAMENTARIA

PRIMERO. Se delegan facultades a los Licenciados en Derecho Luis Genaro Vásquez Rodríguez, Ana Monserrat Hernández Ramírez, Fabiola Itzel Miranda Escamilla y Adriana Alejandra Medrano García, Juan Uribe Mejía, Nancy Karina Mendoza Petrearce, Leonel Iván García Sánchez, Juan Mario Guerrero Monroy, Arturo Hernández Rasgado, Salvador Eduardo Leyte Ballinas, Jorge Antonio López Zarazúa, Juan Manuel Mendoza Muñoz, Nicolas Rangel Vigueras, Josue Ramírez Tamayo, Christian Reyes González, Karla Paola Rodríguez Camacho, Verónica Sánchez López, Ángel Vázquez Gómez y María Teresa Zapata Guerrero para que conjunta o separadamente ejerzan la representación jurídica de la misma en los juicios y procedimientos contenciosos en los que la Cámara sea parte; promuevan y se desistan del juicio de amparo; articulen y absuelvan posiciones; desahoguen las solicitudes y requerimientos que por los conductos legales, formulen las autoridades judiciales y administrativas; realicen las notificaciones de resoluciones y acuerdos de la Cámara o de alguno de sus órganos, en las materias de su competencia realicen todo tipo de promociones, así como para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos, recibir copias de traslado, concurren a las audiencias, rindan pruebas y formulen alegatos, promuevan incidentes y recursos que conforme a derecho procedan ante los Tribunales Jurisdiccionales y Autoridades Administrativas en los que la Cámara de Diputados sea parte.

SEGUNDO. Las facultades que por virtud de este Acuerdo se delegan en el servidor público mencionado, se entenderán única y exclusivamente delegadas a ése en el ámbito de su respectiva competencia.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 07 días del mes de enero de 2019.

PORFIRIO MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA, Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

DIP. FED. PORFIRIO MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA



CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÓNICA
Y GACETA PARLAMENTARIA

GILBERTO BECERRIL OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DE CRONICA Y GACETA PARLAMENTARIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y CON FUNDAMENTO EN EL APARTADO 2.1.3, INCISO H) DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, CERTIFICO QUE LA PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS QUE CONSTAN DE TRES HOJAS DE LA GACETA PARLAMENTARIA NÚMERO 5210 - VI DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON EL EJEMPLAR QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DIRECCION GENERAL, DOY FE. PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO A 05 DE JULIO DE 2019.

JUDICIAL DE LA
ERACION
UNAL COLEGIADO
RIA CIVIL DEL
R-PROBITO
DE MEXICO

ING. GILBERTO BECERRIL OLIVARES

DIRECTOR GENERAL DE CRONICA Y GACETA PARLAMENTARIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CAMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
DIRECCION GENERAL DE CRONICA
Y GACETA PARLAMENTARIA

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1_1.pdf
Secuencia: 3155469

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	CAMM830822HDFMRR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e00000000000000000000000000000017fa	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/03/2020T15:58:40Z / 10/03/2020T09:58:40-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	06 0a 9c 1f a4 0a 1a 31 fe 27 93 20 f8 23 b2 54 c4 32 6a 89 82 72 db c8 3e 50 42 a0 51 67 44 1e f1 a1 27 43 30 9a cb d8 4f 9c d2 d7 bb cc 5d 21 6d ef 27 a2 04 98 35 3f 52 f0 69 4e 79 76 bb c9 e5 b7 0d 69 a9 df 83 19 48 92 3e e3 79 75 50 a2 65 9c a6 13 b7 25 5d 1d e6 b5 5d 77 37 93 b9 6e 67 cd 61 cd 52 1a 7d 84 b8 96 86 fa 53 ea b9 06 6c d4 20 39 ea 34 94 4f 8e 01 de 8a 81 4d 1d c8 cc c1 97 33 74 dd 84 c8 41 82 0d e9 31 9b 5a 37 3c f0 01 25 d4 da 03 15 a7 5c 78 a5 69 25 df 0a 37 b9 7e b5 bd 9a 47 9c bd c9 70 fd db ed 40 70 ce 77 fb f8 52 c7 a5 da f3 fb 60 df 26 0b e1 04 0a c8 ab 30 d2 4d 5a 72 5e 5d 1e 39 6b 52 8d b3 41 f9 bf b3 55 58 d5 5e 13 e7 fa 0c a5 83 4e d5 c1 51 b2 3e 98 00 c0 23 89 80 b9 4a b0 58 a0 30 ce 59 52 29 d0 0f 7c 71 15 06 7f 64 61 89 83 c0			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/03/2020T15:58:41Z / 10/03/2020T09:58:41-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e00000000000000000000000000000017fa			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	10/03/2020T15:58:40Z / 10/03/2020T09:58:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3159416			
	Datos estampillados:	738B04DCFD36EDEE517E4EF81596ABDECB242264			